

**MTRO. CÉSAR AUGUSTO PENICHE ESPEJEL**, Fiscal General del Estado de Chihuahua, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos **21** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; **118, 119 y 121** de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, **1, 2, 6** fracción **VII** y **12** fracción **VII** de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; **2, 4 y 10** fracciones **IV, XI y XII** del Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado, y:

### CONSIDERANDO

**PRIMERO.** En el año 2008 fuimos testigos de la más trascendental reforma de los últimos tiempos en nuestro país en materia de justicia y seguridad pública<sup>1</sup>, la cual estableció, a nivel nacional, un sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, regido bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Más adelante, durante el año 2013, el Congreso de la Unión absorbió la facultad exclusiva para expedir la legislación única en materia procedimental penal<sup>2</sup>; facultad que fue ejercida el 5 de marzo de 2014 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del llamado “Código Nacional de Procedimientos Penales”, en el cual se establece un marco procesal penal único en todo el país sustentado en el sistema procesal penal acusatorio a que alude la reforma constitucional antes señalada<sup>3</sup>.

**SEGUNDO.** El Código Nacional de Procedimientos Penales antes aludido adopta en sus artículos 256 y 257 el *principio de oportunidad*. Para comprender en que consiste dicho principio debemos analizar, primeramente, el criterio antitético sustanciado dentro del *principio de legalidad*, el cual enuncia que «*el Ministerio Público está obligado a iniciar y sostener la persecución penal de todo delito que llegue a su conocimiento, sin que pueda suspenderla, interrumpirla o hacerla cesar a su mero arbitrio*»<sup>4</sup>; dicho principio resulta de la suma de dos principios menores: el *principio de promoción necesaria* (deber de promover la persecución penal ante la noticia de un hecho punible) y el *principio de irretractabilidad* (prohibición de suspender, interrumpir o hacer cesar la persecución ya iniciada)<sup>5</sup>.

**TERCERO.** Sin embargo, la incapacidad inherente de todo sistema procesal penal para perseguir la totalidad de los delitos que se cometen en una determinada sociedad, ha provocado que la aplicación estricta del *principio de legalidad* impida la existencia de un adecuado sistema de selección formal de los casos que son procesados por el sistema, generándose, por el contrario, sistemas de selección natural o informal; así, paródicamente,

<sup>1</sup> Cfr. Congreso de la Unión, “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, *Diario Oficial de la Federación*, sec. 1a. (18 de junio, 2008), pp. 3–11. t. DCLVII, núm. 13.

<sup>2</sup> Cfr. Congreso de la Unión, “Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, *Diario Oficial de la Federación*, sec. 1a. (10 de agosto, 2013), p. 2. t. DCCXXI, núm. 6.

<sup>3</sup> Cfr. México, “Código Nacional de Procedimientos Penales”, 2014, art. Primero Transitorio. Publicado en el DOF del 05 de marzo de 2014.

<sup>4</sup> Vid. María Inés Horvitz Lennon y Julián López Masle, *Derecho Procesal Penal Chileno*, vol. 1, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2003, p. 46, ISBN: 956-10-1402-5. Citando a Julio B. J. Maier, *Derecho procesal penal argentino*, Hammurabi, Buenos Aires, 1989, p. 548, ISBN: 978-950-9079-88-5.

<sup>5</sup> Vid. M. I. Horvitz Lennon, J. López Masle, *Derecho Procesal Penal Chileno*, óp. cit. (n. 4), pp. 46–47.

y a pesar de la fundamentación del *principio de legalidad* en el diverso *principio de igualdad*, pues impone la obligación de perseguir por igual todos los delitos sin permitir seleccionar entre ellos de manera alguna, genera profundas desigualdades en su aplicación práctica<sup>6</sup>.

**CUARTO.** La crítica al *principio de legalidad* ha dado origen, como antítesis teórica, al *principio de oportunidad*, el cual enuncia que «el Ministerio Público, ante la noticia de un hecho punible o, inclusive, ante la existencia de prueba completa de la perpetración de un delito, está autorizado para no iniciar, suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de la persecución penal, cuando así lo aconsejan motivos de utilidad social o razones político-criminales»<sup>7</sup>. De esta forma la aplicación del *principio de oportunidad* tiene dos objetivos principales: en primer lugar «la descriminalización de hechos punibles, evitando la aplicación del poder estatal allí donde otras formas de reacción frente al comportamiento desviado pueden alcanzar mejores resultados o donde resulte innecesaria su aplicación»; y en segundo lugar «la eficiencia del sistema penal en aquellas áreas o para aquellos hechos en los que resulta indispensable su actuación como método de control social, procurando el descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada de casos, que no permite, precisamente, el tratamiento preferente de aquellos que deben ser solucionados indiscutiblemente por el sistema, y como intento válido de revertir la desigualdad que, por selección natural, provoca la afirmación rígida del principio de legalidad»<sup>8</sup>.

**QUINTO.** Así pues, el legislador federal adopta el *principio de oportunidad* a través de la aplicación de los *criterios de oportunidad*, entendidos como la facultad exclusiva del Ministerio Público para suspender, interrumpir, prescindir parcial o totalmente del ejercicio de la acción penal respecto a alguno o varios hechos delictivos o respecto a alguna de las personas que participaron en los mismos<sup>9</sup>.

**SEXTO.** Para el caso el cual nos ocupa, el código procesal penal nacional le confiere dos atribuciones a los Fiscales Generales en las Entidades federativas<sup>10</sup>, cargo el cual ostento dentro del Estado de Chihuahua. En primer término, la de emitir criterios generales para la aplicación de criterios de oportunidad<sup>11</sup>; y, en segundo lugar, la de delegar a ciertos Servidores Públicos pertenecientes a la Fiscalía General del Estado la facultad para aplicar dichos criterios<sup>12</sup>.

<sup>6</sup> Cfr. *Ibíd.*, pp. 47–48.

<sup>7</sup> Vid. *Ibíd.*, p. 48. Citando a J. B. J. Maier, *Derecho procesal penal argentino*, *óp. cit.* (n. 4), p. 556.

<sup>8</sup> Vid. M. I. Horvitz Lennon, J. López Masle, *Derecho Procesal Penal Chileno*, *óp. cit.* (n. 4), pp. 48–49. Citando a J. B. J. Maier, *Derecho procesal penal argentino*, *óp. cit.* (n. 4), p. 558.

<sup>9</sup> Cfr. Cámara de Diputados: LXII Legislatura (Comisión de Justicia), “Dictamen a discusión: De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales”, *Gaceta Parlamentaria*, año XVII, núm. 3955-II (5 de febrero, 2014), p. 13.

<sup>10</sup> Vid. “CNPP”, *óp. cit.* (n. 3), art. 3 fracc. XII.

<sup>11</sup> Cfr. *Ibíd.*, p. 256 párr. 4°:

*El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código, así como en los criterios generales que al efecto emita el Procurador o equivalente*

<sup>12</sup> Cfr. *Ibíd.*, p. 256 párr. 6°:

**SÉPTIMO.** Por otro lado, el 9 de febrero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el extracto de los «...lineamientos por los que se establecen los criterios generales y el procedimiento para la aplicación de los criterios de oportunidad...»<sup>13</sup>, los cuales fueron aprobados por medio del Acuerdo CNPJ/XXXIII/12/2015, adoptado en el marco de la XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Estos lineamientos tenían la finalidad de ser criterios orientadores para que las procuradurías o fiscalías de cada una de las entidades federativas emitan su normatividad correspondiente<sup>14</sup>.

**OCTAVO.** Con base en todo lo anterior, he resuelto emitir los criterios generales que los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado deberán observar en la aplicación de los criterios de oportunidad, ello con base en lo previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales y, en algunos aspectos, por los criterios orientadores de los lineamientos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; así como establecer la delegación de facultades a los Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado que podrán aplicar criterios de oportunidad.

En mérito de lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente:

## ACUERDO

### Sección 1 Generalidades

#### PRIMERO. Objeto del acuerdo

Este acuerdo tiene por objeto establecer los criterios orientadores de actuación y el procedimiento a observar por los Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado aquí mencionados, en la aplicación de los criterios de oportunidad establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales; así como delegar facultades a los Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado, los cuales podrán aplicar criterios de oportunidad.

Para la aplicación de los criterios de oportunidad, los Servidores Públicos ponderarán en todo momento las circunstancias particulares del caso.

### Sección 2 Criterios de Actuación

#### SEGUNDO. Insignificancia del hecho

---

*La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el Procurador o por el servidor público en quien se delegue esta facultad, en términos de la normatividad aplicable*

<sup>13</sup> Vid. CNPJ, "Lineamientos por los que se establecen los criterios generales y el procedimiento para la aplicación de los criterios de oportunidad y la de la determinación de la pena que el Ministerio Público solicitará al Juez de Control en la aplicación del procedimiento abreviado", *Diario Oficial de la Federación*, sec. 2a. (9 de febrero, 2016), p. 59. t. DCCXLIX, núm. 7.

<sup>14</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 3.

- A. Para la aplicación de un criterio de oportunidad en los supuestos del artículo 256 párrafo 2º fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: «*Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión*», se deberán tomar en cuenta los siguientes criterios:
- I. Para efectos de determinar la punibilidad máxima de prisión se tomarán en cuenta las modalidades del delito, es decir, el tipo básico con sus agravantes o atenuantes.
  - II. Procederá en aquellos casos en que el imputado cometa la conducta para cubrir alguna necesidad básica, ya sea personal o familiar.
  - III. No procederá en los casos en que el imputado:
    - a) Haya sido beneficiado con alguna salida alterna, perdón u otro criterio de oportunidad por hechos de la misma naturaleza;
    - b) Cuenten con antecedentes penales o procesales por delito doloso en los últimos seis años anteriores al hecho por el cual se ve beneficiado; o
    - c) Se encuentre sometido a alguna investigación por hechos de la misma naturaleza.
  - IV. Tampoco procederá cuando el delito atribuido se haya cometido con violencia sobre las personas o las cosas.
- B. Por lo que hace a la fracción II del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a la letra dice: «*Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares*», se deberán tomar en cuenta los siguientes criterios:
- I. No procederá en los casos en que el imputado:
    - a) Haya sido beneficiado con alguna salida alterna, perdón u otro criterio de oportunidad por hechos de la misma naturaleza;
    - b) Cuenten con antecedentes penales o procesales por delito doloso en los últimos seis años anteriores al hecho por el cual se ve beneficiado; o
    - c) Se encuentre sometido a alguna investigación por hechos de la misma naturaleza.
  - II. Tampoco procederá cuando el delito atribuido:
    - a) Sea de contenido patrimonial y se haya cometido con violencia en las cosas o el quebranto exceda de 50 veces Unidad de Medida de Actualización.
    - b) Se trate de homicidio, o lesiones diversas a las previstas en las fracciones I y II del artículo 129 del Código Penal.

### TERCERO. Pena natural



Para la aplicación de un criterio de oportunidad en el supuesto del artículo **256** fracción **III** del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: «*Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de la pena*», se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

- I. Se analizará la existencia de la relación causal entre el hecho delictivo y la consecuencia padecida por el imputado, es decir, es necesario que la consecuencia padecida sea con motivo de la comisión del delito por el que se le concede el criterio.
- II. Se deberá establecer de manera objetiva la consecuencia padecida por el imputado:
  - a) Si se trata en un daño físico o psicoemocional, se analizará su gravedad, con base a su grado de afectación y a la duración en que ha permanecido en dicho estado, recurriendo para ello a las pruebas técnicas, tales como los informes médicos o psicológicos respectivos.
  - b) Si incidiera en la enfermedad terminal, se analizará su condición médica, con base en los informes técnicos respectivos.
- III. Se determinará la posible pena a imponer, con base en los criterios para la individualización de sanciones que prevé tanto el Código Penal del Estado<sup>15</sup> como el Código Nacional de Procedimientos Penales<sup>16</sup>.
- IV. Se ponderará, con base en las reglas de la lógica y de la experiencia común, si la eventual aplicación de la pena resultaría notoriamente innecesaria o desproporcional.
- V. No procederá cuando el delito atribuido se haya cometido con violencia sobre las personas o las cosas.
- VI. Adicionalmente, se descartará la existencia de riesgo fundado de que el imputado pueda cometer algún un acto en contra de la víctima u ofendido, el cual afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida.

#### **CUARTO. Pena ineficaz**

Para la aplicación de un criterio de oportunidad en el supuesto del artículo **256** fracción **IV** del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: «*La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que (sic) carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría imponer-*

<sup>15</sup> Vid. "Código Penal del Estado de Chihuahua", 2007, art. 65 ss. Publicado en el POE núm. 103, del 27 de diciembre de 2006.

<sup>16</sup> Vid. "CNPP", *óp. cit.* (n. 3), art. 410.

se por otro delito por el que esté siendo procesado por independencia del fuero», se deberán tomar en cuenta los siguientes criterios:

- I. Las penas impuestas en otros procesos serán consideradas cuando la o las sentencias condenatorias se encuentren firmes y ejecutoriadas por amparo, es decir, hasta que se haya resuelto el fondo de los caso en el amparo directo.
- II. En el segundo supuesto de la fracción IV, que se refiere al caso de la pena que pudiera imponerse, solo procederá el criterio de oportunidad hasta que la o las sentencias condenatorias se encuentren firmes y ejecutoriadas por amparo.
- III. No procederá el criterio de oportunidad cuando el imputado este en posibilidades de obtener beneficios preliberacionales por la pena de la que se pretende prescindir<sup>17</sup>.
- IV. No procederá cuando el delito se haya cometido con violencia sobre las personas o las cosas.
- V. Para la procedencia es necesario que el imputado no haya sido beneficiado con alguna salida alterna, perdón u otro criterio de oportunidad por hechos de la misma naturaleza.
- VI. Será procedente siempre y cuando el imputado no se encuentre sometido a diversas investigaciones por hechos de la misma naturaleza.

#### QUINTO. Colaboración en la investigación

Para la aplicación de un criterio de oportunidad en el supuesto del artículo **256** fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: «*Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio*», se deberán tomar en cuenta los siguientes criterios:

- I. Se analizará que la reprochabilidad de la conducta, motivo de la persecución penal de la cual se prescinda, sea menos grave a aquella cuya persecución se sigue con interés preponderante. Para ello se verificará si quien aporta la información se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:
  - a) Generó menor afectación al bien jurídico tutelado;
  - b) Intervino con menor grado de participación que otro imputado;
  - c) Pudiera alcanzar menor punibilidad que otro imputado, ya sea dentro de la misma persecución penal o en otra u otras diversas;
  - d) Actuó bajo las órdenes o instrucciones de un superior jerárquico que también se considere imputado; o bien, bajo el mando de algún aparato organizado de poder; o

<sup>17</sup> Vid. "Ley Nacional de Ejecución Penal", 2016, arts. 136-151. Publicado en el DOF del 16 de junio de 2016.

- e) Obtuvo un menor o nulo beneficio económico derivado del hecho delictivo.
- II. Se determinará si la información suministrada:
  - a) Es esencial, en la medida en que aporte elementos de prueba los cuales se desconocían previamente; o, si se conocían, permitan corroborar la existencia del hecho delictivo o la intervención punible de diverso imputado;
  - b) Es eficaz, en la medida que tenga pertinencia sustancial, ya sea para esclarecer el hecho investigado u otros conexos o para evitar que continúe el delito o se perpetren otros; o bien, proporcione información útil para probar la participación de otros imputados que tengan funciones de dirección o administración dentro de las organizaciones criminales; y
  - c) Es corroborable, en la medida en que guarde coherencia armónica con los elementos de prueba conocidos o cognoscibles, sobre los cuales se sustente la teoría del caso de la Representación Social.
- III. Se verificará si existe constancia de que el imputado hubiese aceptado de forma expresa y en presencia de su defensor, declarar en juicio respecto de la información proporcionada, para tal efecto deberá estar disponible por cualquier medio y etapa procesal que sea requerido por el Ministerio Público.
- IV. El agente del Ministerio Público reanudará el proceso de persecución penal en contra del sujeto que aportó la información si se presenta cualquiera de las siguientes hipótesis:
  - a) Si la información por él proporcionada, y con base en la cual se pactó la negociación, es falsa, o si es incompleta en aspectos relevantes.
  - b) Si se niega a declarar ante la autoridad judicial competente o, si declara de forma hostil, reticente o poco creíble.
  - c) Si lleva a cabo actos desleales que pongan en riesgo el éxito de la persecución penal.
  - d) Si realiza acciones tendientes a poner en riesgo la vida o integridad personal de otros órganos de prueba dentro del proceso penal.

#### **SEXTO. Desproporción o irracionalidad de la persecución penal**

Para la aplicación de un criterio de oportunidad en el supuesto del artículo **256** fracción **VI** del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: «*Cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal*», se deberán tomar en cuenta los siguientes criterios:

- I. Se deberá tomar en consideración el valor del bien jurídico tutelado, la naturaleza dolosa o imprudencial de la conducta, los medios empleados y las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como la forma de intervención del imputado en la comisión del delito.

- II. Se determinará, fundada y motivadamente, las causas o circunstancias las cuales rodean la comisión de la conducta punible, estableciendo las razones por las cuales resulta desproporcionada o irrazonable la persecución penal.
- III. Adicionalmente, se descartará la existencia de riesgo fundado de que el imputado pueda cometer algún acto en contra de la víctima u ofendido, el cual afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida.
- IV. No procederá en los casos en que el imputado:
  - a) Haya sido beneficiado con alguna salida alterna, perdón u otro criterio de oportunidad por hechos de la misma naturaleza;
  - b) Cuenten con antecedentes penales o procesales por delito doloso en los últimos seis años anteriores al hecho por el cual se ve beneficiado; o
  - c) Se encuentre sometido a alguna investigación por hechos de la misma naturaleza..
- V. Tampoco procederá cuando el delito atribuido se haya cometido con violencia sobre las personas o las cosas.

**Sección 3**  
**Procedimiento**

**SÉPTIMO. Pautas generales**

- A. Al momento de decidir sobre la implementación de un criterio de oportunidad, deberá realizarse una valoración integral de la denuncia y de los demás datos de prueba con que se cuente.
- B. Los criterios de oportunidad se aplicarán sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de acuerdo a lo establecido en la Ley y en este Acuerdo<sup>18</sup>; y verificando, en su caso, que se hayan reparado o garantizado los daños<sup>19</sup>.

En los delitos cometidos contra el servicio público en los cuales se genere una afectación al erario se ponderará, acorde a las circunstancias del caso en concreto, hasta qué punto la aplicación del criterio de oportunidad, bajo la hipótesis de colaboración en la investigación, permita garantizar el pago de la reparación del daño. Entendiéndose que está garantizada dicha reparación, si la información aportada contribuye dentro del procedimiento para alcanzar una sanción pecuniaria.

<sup>18</sup> Vid. "CNPP", *óp. cit.* (n. 3), art. 256 párr. 4°:

*El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código, así como en los criterios generales que al efecto emita el Procurador o equivalente.*

<sup>19</sup> Vid. *Ibid.*, art. 256 párr. 1°.



Si el patrimonio afectado corresponde a un particular, el imputado al cual se le aplicará un criterio de oportunidad bajo la hipótesis de colaboración en la investigación cubrirá, en su caso, la parte proporcional de la reparación del daño que le corresponda, siempre y cuando exista consentimiento expreso por parte de la víctima u ofendido del delito.

- C. No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos proscritos por el artículo 256 párrafo 3° del Código Nacional de Procedimientos Penales<sup>20</sup>. Para estos efectos se considerará que se afecta gravemente el interés público si la conducta desplegada atenta contra la seguridad o permanencia las instituciones del Estado.
- D. La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento a partir del inicio del procedimiento penal y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral del imputado que resultará beneficiado<sup>21</sup>, sin perjuicio de que se pudiera exceptuar dicho plazo a través de una interpretación conforme, siempre y cuando existan circunstancias o información superviniente.
- E. La aplicación de un criterio de oportunidad no comprenderá el decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito.

#### **OCTAVO. Autorización**

El Agente del Ministerio Público a cargo del asunto solicitará la autorización de aplicación del criterio de oportunidad al Servidor Público facultado mediante el presente acuerdo.

Al oficio de solicitud se anexará un informe ejecutivo y/o un proyecto de acuerdo, debidamente fundado y motivado. En caso de ser necesario se pondrá a disposición del Servidor Público facultado la carpeta de investigación, para su mejor análisis.

La solicitud deberá ser resuelta y remitida al Ministerio Público solicitante a la brevedad posible, remitiendo el acuerdo en el cual se autoriza y/o decreta la aplicación del criterio de oportunidad en el caso concreto; o, en su defecto, mandando las observaciones pertinentes.

#### **NOVENO. Delegación de facultades**

La facultad para autorizar y/o decretar fundada y motivadamente la aplicación de criterios de oportunidad se delega por el suscrito a los siguientes Servidores Públicos, en el ámbito de sus competencias:

- A. En los supuestos establecidos por el artículo 256 fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, delego dicha facultad a todos los Servidores Públicos con el cargo de agente del Ministerio Público.

<sup>20</sup> Vid. *Ibíd.*, art. 256 párr. 3°:

*No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público.*

<sup>21</sup> Vid. *Ibíd.*, art. 256 párr. 5°.

- B.** En los supuestos establecidos por el artículo **256** fracciones **III, IV, V y VI** del Código Nacional de Procedimientos Penales, delego dicha facultad al Fiscal Especializado en Control, Análisis y Evaluación, a los Fiscales de Distrito por Zona, al Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas, al Fiscal Especializado en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, a la Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género y a los Agentes del Ministerio Público Coordinadores de Unidad de Investigación.

Las facultades delegadas en el presente resolutivo podrán asumirse por sus destinatarios a partir del momento en el cual cobre vigencia el presente acuerdo, pudiendo el suscrito ejercer dichas facultades de manera indistinta, sin afectar mi ejercicio directo.

### TRANSITORIOS

**PRIMERO.** Los criterios orientadores de actuación y el procedimiento a observar, establecidos en este acuerdo, serán aplicables para los asuntos seguidos con el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de la vigencia del presente instrumento.

Lo relativo a la delegación de facultades será aplicable para todos los asuntos, con independencia del ordenamiento procesal que regule el caso, quedando sin efecto los acuerdos delegatorios anteriores en lo que respecta a la aplicación del criterio de oportunidad.

**SEGUNDO.** El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.

**TERCERO.** Para su mayor difusión, publíquese el presente acuerdo en la página electrónica de internet de la Fiscalía General del Estado.

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
"SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN"  
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

MTRO. CÉSAR AUGUSTO PENICHE ESPEJEL



**FISCALÍA GENERAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**